

SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, dieciocho (18) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Auto Interlocutorio No 63

Proceso	: Ordinario de Primera Instancia
Demandante	: MARÍA DANIELA GARCÍA ABREU
Demandados	: CLARA MARCELA RAMÍREZ OSORIO, CREACIONES GORAMI S.A.S.
Radicado	: 05001 31 05 015 2022 00389 01
Providencia	: Auto
Temas y Subtemas	: Solicitud de medida cautelar, embargo y secuestro de establecimiento de comercio.
Decisión	: Confirma Auto que negó medida cautelar.

En la fecha antes anotada el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, conformada por las Magistradas **LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL, CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO y MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ, como ponente**, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado, que se traduce en la siguiente decisión¹:

¹ De conformidad con lo establecido en la Ley 2213 del 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del decreto legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...”, que modificó el trámite en los procesos de la jurisdicción Laboral.

ANTECEDENTES

Pretensiones:

Se solicita se declare la existencia de un contrato de trabajo, entre el 4 de marzo de 2019 y el 31 de marzo de 2022, el cual terminó por renuncia de la demandante provocada por hostigamientos y constreñimiento de un hijo de la representante legal de Creaciones GORAMI S.A.S.; se condene al reconocimiento y pago de indemnización por despido sin justa causa, prestaciones sociales, vacaciones, sanción por no consignación de cesantías, condenas ultra y extra petita, costas procesales.

Solicitud de medida cautelar:

Se decrete el **embargo y secuestro del establecimiento de comercio donde se desarrollan las actividades de CREACIONES GORAMI S.A.S.**, identificando la matrícula mercantil y nomenclatura, ubicado en la ciudad de Medellín; **en su defecto**, se decrete esta misma medida **sobre los remanentes producto de los bienes muebles e inmuebles ya embargados** y que por cualquier causa se llegaren a desembargar en favor de CREACIONES GORAMI S.A.S. y de su representante legal, en el proceso con radicado 05001310500220220035900.

Decisión sobre la medida cautelar:

El Juzgado de Primera Instancia mediante Auto del 3 de octubre de 2022 (Remitido a este Tribunal el día 18 de julio de 2023 y repartido por la Oficina de Apoyo Judicial el 21 de julio de este año, archivos 05 primera instancia y 01 segunda instancia), admitió la demanda y **negó**

la medida cautelar solicitada, explicando en términos generales que **el embargo y secuestro de establecimiento de comercio, es ajeno a la caución de la que trata la norma procesal laboral** y expresamente fue excluida de aplicación en esta especialidad, conforme a Sentencia C-043 de 2021 de la H. Corte Constitucional.

El apoderado de la demandante interpuso recurso de Apelación, manifestando que es su deber **insistir en la medida cautelar sobre el establecimiento de comercio CREACIONES GORAMI S.A.S.**, para que no se hagan irrisorias las pretensiones de la demanda, siendo la única manera de hacer exigible el pago de las prestaciones sociales y vacaciones reclamadas, que ascienden a la suma de \$10.405.004 (archivo 03).

Agotado el trámite procesal correspondiente a este tipo de procesos y sin que se aprecie causal alguna de nulidad que invalide la actuación, se procede a resolver el asunto de fondo, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

La competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de **Apelación**, de conformidad con lo establecido en los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, 15 y 66A del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

Conflicto Jurídico:

El asunto a dirimir, radica en verificar si hay lugar a revocar la decisión de Primera Instancia; analizándose si es

procedente decretar como medida cautelar en este proceso ordinario, el embargo y secuestro de establecimiento de comercio denunciado como propiedad de las codemandadas.

Encontrando esta Sala de Decisión Laboral procedente, confirmar el Auto de Primera Instancia; por las siguientes razones:

El artículo 37 de la Ley 712 de 2001 que modificó el Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social en su artículo 85A, al regular la medida cautelar en proceso ordinario, señala lo siguiente:

“...ARTÍCULO 85-A. MEDIDA CAUTELAR EN PROCESO ORDINARIO. <Artículo modificado por el artículo 37-A de la Ley 712 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando el demandado, en proceso ordinario, efectúe actos que el juez estime tendientes a insolventarse o a impedir la efectividad de la sentencia, o cuando el juez considere que el demandado se encuentra en graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones, **podrá imponerle caución para garantizar las resultas del proceso**, la cual oscilará de acuerdo a su prudente proceso entre el 30 y el 50% del valor de las pretensiones al momento de decretarse la medida cautelar.

En la solicitud, la cual se entenderá hecha bajo la gravedad del juramento, se indicarán los motivos y los hechos en que se funda. Recibida la solicitud, se citará inmediatamente mediante auto dictado por fuera de audiencia a audiencia especial al quinto día hábil siguiente, oportunidad en la cual las partes presentarán las pruebas acerca de la situación alegada y se decidirá en el acto. La decisión será apelable en el efecto devolutivo.

Si el demandado no presta la caución en el término de cinco (5) días no será oído hasta tanto cumpla con dicha orden...”. (Negritas fuera de texto).

La anterior norma fue declarada exequible de manera condicionada por la H. Corte Constitucional mediante Sentencia C 043 del 25 de febrero de 2021, “...en el entendido que en la jurisdicción ordinaria laboral pueden invocarse las medidas cautelares innominadas previstas en el literal “c”, numeral 1, del artículo 590 del Código General del Proceso...” (Negritas fuera de texto); descartando

que en materia laboral, procedan las demás medidas previstas en el artículo 590 del Código General del Proceso ya que responden a solicitudes específicas del proceso civil. Explicó la Corte que **admitir en la especialidad Laboral la inscripción de la demanda o el embargo y secuestro de un bien, implicaría pasar por alto que el legislador habilitó estas medidas para casos particulares en lo civil**, como cuando se persigue el reconocimiento del derecho de dominio o el pago de una indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual o extracontractual; veamos los apartes pertinentes:

*“...En tal sentido, la Sala considera que existe otra interpretación posible de la norma acusada que permite garantizar el derecho a la igualdad de los justiciables del proceso laboral y también superar el déficit de protección evidenciado. Consiste en sostener que **el art. 37A de la Ley 712 de 2001 sí admite ser complementado por remisión normativa a las normas del CGP, dado que el primero no contempla una disposición especial que proteja preventivamente los derechos reclamados en aquellos eventos donde la caución es inidónea e ineficaz. Aplicación analógica que procede únicamente respecto del artículo 590, numeral 1º, literal "c" del estatuto procesal general, es decir, de las medidas cautelares innominadas, por las siguientes razones.***

(...)

*En efecto, la medida cautelar innominada consagrada en el literal "c", numeral 1º, del artículo 590 del CGP, es una prerrogativa procesal que por su lenguaje no explícito puede ser aplicada ante cualquier tipo de pretensión en un proceso declarativo, dado que no condiciona su procedencia a una situación concreta definida por el legislador. Es a través de este tipo de medidas que el juez laboral puede, con fundamento en los principios de razonabilidad y proporcionalidad, determinar si procede su adopción de acuerdo con el tipo de pretensión que se persiga. A través de ellas **el juez podrá adoptar la medida que "encuentre razonable para la protección del derecho objeto de litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad de la pretensión.***

*Por el contrario, **las demás medidas previstas en el art. 590 del CGP responden a solicitudes específicas del proceso civil. Si se admitieran en el proceso laboral todas las medidas cautelares de la referida norma procesal general, implicaría que en él pudiera***

solicitarse la inscripción de la demanda o el embargo y secuestro de un bien, pasando por alto que el legislador habilitó estas medidas para casos particulares en lo civil, esto es, cuando se persigue el reconocimiento del derecho de dominio o el pago de una indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual o extracontractual...” (Negritas fuera de texto).

De acuerdo a lo explicado, **la medida cautelar solicitada por el apoderado de la demandante, consistente en el embargo y secuestro de establecimiento de comercio, no es procedente en este proceso ordinario laboral, por expresa disposición de la H. Corte Constitucional en Sentencia C-043 de 2021; tal como explicó la Juez de Primera Instancia** en la providencia que no accedió a lo solicitado.

Es de anotarse que la parte interesada, en cualquier etapa del proceso y en caso de encontrarlo pertinente, podrá pedirle al Juzgado se estudie la procedencia de medida cautelar, cumpliendo con los requisitos contemplados en el artículo 85A del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y en el literal c) del numeral 1° del artículo 590 del Código General del Proceso, conforme a lo señalado por la H. Corte Constitucional en la Sentencia citada.

Así las cosas, esta Sala de Decisión Laboral encuentra procedente **confirmar** la decisión de Primera Instancia, mediante la cual se negó el decreto de la medida cautelar consistente en **embargo y secuestro de establecimiento de comercio**, propiedad las codemandadas.

COSTAS:

Se condenará en esta Segunda Instancia a cargo de la demandante, al no haber prosperado el recurso de apelación formulado, fijándose las agencias en derecho en cuantía equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente (\$1.160.000) en favor de las codemandadas Clara Marcela Ramírez Osorio y CREACIONES GORAMI S.A.S., en un del 50% para cada una; de conformidad con lo establecido en los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso y el Acuerdo 10554 de 2016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL,** administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: Se **CONFIRMA** la decisión de Primera Instancia, mediante la cual se negó el decreto de la medida cautelar consistente en *embargo y secuestro de establecimiento de comercio*, propiedad las codemandadas; de conformidad con lo explicado en la parte considerativa de esta Providencia.

SEGUNDO: Se CONDENA en Costas en Segunda Instancia a cargo de la demandante señora María Daniela García Abreu, fijándose las agencias en derecho en cuantía equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente (\$1.160.000) en favor de las codemandadas Clara Marcela Ramírez Osorio y CREACIONES GORAMI S.A.S., en un 50% para cada una; según lo indicado en la parte motiva.

TERCERO: Lo resuelto se notifica en **ESTADOS** electrónicos y se ordena devolver el proceso al Despacho de origen. En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Las Magistradas,



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO



LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -
HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados
N ° **144 del 18 de agosto de 2023**
consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>